



JURISDICCION ORDINARIA [Generar Carátula](#) [Guardar PDF](#)

Acuerdos 1472 (Civil) 1480 (Laboral) 1667 (Familia) de 2002
y 10443 de 2015 (Actualiza grupos de reparto Civil y Familia)

Especialidad:

LABORAL DEL CIRCUITO

Grupo de reparto:

02

Comuna:

N/A

(para Pequeñas Causas y Comp. múltiple)

Nombre:

ORDINARIOS DE PRIMERA INSTANCIA

Partes del proceso

Identificación
C.C. Cédula de ciudadanía / Nit.

Nombre(s) y Apellido(s)
DEMANDANTE(S)

42.069.180 CLEMENCIA MEJÍA GONZÁLEZ

DEMANDADO(S)

800149496-2 COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS
800144331-3 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y
CESANTÍAS PORVENIR S.A.
900.336.004-7 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -
COLPENSIONES

APODERADO

10.135.708 JAVIER CASTAÑEDA TABORDA TP 197.733

Cuadernos:

3

Folios:

1 – 17 - 136

Anotaciones especiales (documentos originales / folio) / Observaciones

SIN OBSERVACIONES


RV: DEMANDA PARA REPARTO: LABORAL -CLEMENCIA MEJÍA GONZÁLEZ C.C.42.069.180 - NIT. 800149496-2 - NIT. 800144331-3 - NIT. 900.336.004-7

Recepción Procesos Laborales - Valle del Cauca - Cali <repartolaboralcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mié 21/08/2024 8:27 AM

Para:Juzgado 05 Laboral - Valle del Cauca - Cali <j05lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC:notificaciones@accionlegal.co <notificaciones@accionlegal.co>

 3 archivos adjuntos (23 MB)

CARATULA.pdf; DEMANDA Y PODER.pdf; ANEXOS1.pdf;

Cordial saludo,

Enviamos adjunto **PROCESO** allegado a esta oficina por medio de correo electrónico y por reparto correspondió a su despacho.

Acta de reparto:

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

ACTA INDIVIDUAL DE REPARTO

Fecha : 21/ago./2024

Página 1

CORPORACION

GRUPO ORDINARIOS DE PRIMERA INSTANCIA

JUZGADOS DE CIRCUITO

CD. DESP

SECUENCIA:

FECHA DE REPARTO

REPARTIDO AL DESPACHO

005

467603

21/ago./2024

JUZGADO 05 LABORAL CIRCUITO DE CALI ORALIDAD

IDENTIFICACION

NOMBRE

APELLIDO

SUJETO PROCESAL

42069180

CLEMENCIA MEJIA GONZALEZ

01

10135706

JAVIER CASTAÑEDA TABORDA

03

C27001-CS01A10

CUADERNOS 1

APIEDRAR

EMPLEADO

FOLIOS

POR CORREO ELECTRONICO

OBSERVACIONES

Consulta reporte por secuencia

CONSULTA POR SECUENCIA - Ing. Jorge Olmedo Mayor Ruiz

CORPORACION

31

ESPECIALIDAD

05

SECUENCIA

467603


BUSCAR


NUEVA CONSULTA

	Fecha	Secuencia	Juzgado	Parte	ID	Nombre	nomgrupo
▶ 1	21/08/2024 8:26 a. m.	467603	JUZGADO 05 LABORAL CIRCUITO DE CALI ORALIDAD	01	42069180	CLEMENCIA MEJIA GONZALEZ	ORDINARIOS DE PRIMERA INSTANCIA
2	21/08/2024 8:26 a. m.	467603	JUZGADO 05 LABORAL CIRCUITO DE CALI ORALIDAD	02	800144331-3	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.	ORDINARIOS DE PRIMERA INSTANCIA
3	21/08/2024 8:26 a. m.	467603	JUZGADO 05 LABORAL CIRCUITO DE CALI ORALIDAD	02	800149496-2	COLFONDOS S.A	ORDINARIOS DE PRIMERA INSTANCIA
4	21/08/2024 8:26 a. m.	467603	JUZGADO 05 LABORAL CIRCUITO DE CALI ORALIDAD	02	900336004-7	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES	ORDINARIOS DE PRIMERA INSTANCIA
5	21/08/2024 8:26 a. m.	467603	JUZGADO 05 LABORAL CIRCUITO DE CALI ORALIDAD	03	10135706	JAVIER CASTAÑEDA TABORDA	ORDINARIOS DE PRIMERA INSTANCIA

Adjunto reporte de módulo de consulta previo al reparto:

CONSULTA POR IDENTIFICACION - Ing. Jorge Olmedo Mayor Ruiz

 **Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura**
República de Colombia



NUEVA CONSULTA

CONSULTAR CUANDO
ESTÁ EN EL 250

CONSULTAR SI HAY
NUEVA PRESENTACIÓN

IDENTIFICACION

NOMBRE

☒ Demandante
☐ Demandado
☐ Apoderado

BUSCAR


RESULTADO DE LA BUSQUEDA


ATENCIÓN

NO HAY INFORMACION CON IDENTIFICACION 42069180.

Aceptar

CONSULTA POR NOMBRE - Ing. Jorge Olmedo Mayor Ruiz

 Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia



NUEVA CONSULTA

CONSULTAR CUANDO
ESTA EN EL 250

CONSULTAR SI HAY
NUEVA PRESENTACIÓN

INGRESE NOMBRE

CLEMENCIA MEJIA GONZALEZ

☒ Demandante
☐ Demandado
☐ Apoderado

BUSCAR

NOMBRE CONSULTADO

%CLEMENCIA%MEJIA%GONZALEZ%

RESULTADO DE LA BUSQUEDA

ATENCIÓN

NO HAY INFORMACION CON NOMBRE:
%CLEMENCIA%MEJIA%GONZALEZ%.

Aceptar

Por favor verificar el acta, en caso de que no pertenezca al juzgado por favor hacer devolución por este mismo medio informando a la oficina judicial de Cali (reparto).

La oficina Judicial reenvía los archivos recibidos por correo electrónico, cualquier requerimiento hacerlo directamente al juzgado o al demandante.

Atentamente,

ANDREA PIEDRAHITA
Auxiliar Administrativo
Oficina Judicial de Cali

De: ACCIÓN LEGAL SERVICIOS JURÍDICOS INTEGRALES S.A.S. <notificaciones@accionlegal.co>

Enviado: martes, 20 de agosto de 2024 3:39 p. m.

Para: Buzon ProcesosJudiciales <procesosjudiciales@colfondos.com.co>; notificacionesjudiciales@porvenir.com.co <notificacionesjudiciales@porvenir.com.co>; notificacionesjudiciales <notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co>; procesosnacionales@defensajuridica.gov.co <procesosnacionales@defensajuridica.gov.co>; Procesos Judiciales - Oficina Juridica <procesosjudiciales@procuraduria.gov.co>; Recepción Procesos Laborales - Valle del Cauca - Cali <repartolaboralcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: DEMANDA PARA REPARTO: LABORAL -CLEMENCIA MEJÍA GONZÁLEZ C.C.42.069.180 - NIT. 800149496-2 - NIT. 800144331-3 - NIT. 900.336.004-7

Señor (a)

JUEZ LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI – REPARTO

E. S. D.

REFERENCIA: Proceso Ordinario Laboral de Primera Instancia

DEMANDANTE: Clemencia Mejía González

DEMANDADAS: Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías, Administradora De Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir y Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones.

JAVIER CASTAÑEDA TABORDA, mayor de edad y vecino de Pereira, identificado con la C.C. No. 10.135.708 de Pereira, portador de la T.P. No. 197.733 del C.S.J., actuando en calidad de abogado inscrito en el Certificado de Existencia y Representación Legal de la sociedad **ACCIÓN LEGAL SERVICIOS JURÍDICOS INTEGRALES S.A.S.** identificada con NIT. No. 900.902.274-7, quien a su vez obra como apoderada de la señora **CLEMENCIA MEJÍA GONZÁLEZ**, identificada con C.C. No. 42.069.180 de Pereira (Risaralda), a Usted respetuosamente me dirijo para presentar demanda Ordinaria Laboral de Primera Instancia, en contra de **COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS**, identificada con NIT. 800149496-2, la cual está legalmente representada por su presidente doctora **MARCELA GIRALDO GARCÍA** o por quien haga sus veces, en contra de la **ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR**, identificada con NIT. 800144331-3, la cual está legalmente representada por su presidente **MIGUEL LARGACHA MARTÍNEZ** o por quien como tal haga sus veces, y en contra de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**, Empresa Industrial y Comercial del Estado, organizada como entidad financiera de carácter especial, vinculada al Ministerio de Trabajo, identificada con NIT. 900.336.004-7, con domicilio principal en Bogotá D.C., y regional en esta ciudad, la cual está legalmente representada por su gerente regional doctora **PIEDAD CECILIA CARDONA PÉREZ** o por quien haga sus veces.

Muchas gracias

--

Atentamente,

21/8/24, 9:53 a.m.

Correo: Juzgado 05 Laboral - Valle del Cauca - Cali - Outlook

Acción Legal Servicios Jurídicos Integrales S.A.S.
Calle 19 No. 8-34 Oficina 1206 Pereira.
P.B.X: (6) 3352222 Celular: 3135517009

Señor (a)
JUEZ LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI – REPARTO
E. S. D.

REFERENCIA: Proceso Ordinario Laboral de Primera Instancia
DEMANDANTE: Clemencia Mejía González
DEMANDADAS: Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías, Administradora De Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir y Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones.

JAVIER CASTAÑEDA TABORDA, mayor de edad y vecino de Pereira, identificado con la C.C. No. 10.135.708 de Pereira, portador de la T.P. No. 197.733 del C.S.J., actuando en calidad de abogado inscrito en el Certificado de Existencia y Representación Legal de la sociedad **ACCIÓN LEGAL SERVICIOS JURÍDICOS INTEGRALES S.A.S.** identificada con NIT. No. 900.902.274-7, quien a su vez obra como apoderada de la señora **CLEMENCIA MEJÍA GONZÁLEZ**, identificada con C.C. No. 42.069.180 de Pereira (Risaralda), a Usted respetuosamente me dirijo para presentar demanda Ordinaria Laboral de Primera Instancia, en contra de **COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS**, identificada con **NIT. 800149496-2**, la cual está legalmente representada por su presidente doctora **MARCELA GIRALDO GARCÍA** o por quien haga sus veces, en contra de la **ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR**, identificada con **NIT. 800144331-3**, la cual está legalmente representada por su presidente **MIGUEL LARGACHA MARTÍNEZ** o por quien como tal haga sus veces, y en contra de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**, Empresa Industrial y Comercial del Estado, organizada como entidad financiera de carácter especial, vinculada al Ministerio de Trabajo, identificada con **NIT. 900.336.004-7**, con domicilio principal en Bogotá D.C., y regional en esta ciudad, la cual está legalmente representada por su gerente regional doctora **PIEDAD CECILIA CARDONA PÉREZ** o por quien haga sus veces, basándome en los siguientes:

HECHOS

1. La señora **CLEMENCIA MEJÍA GONZÁLEZ** nació el 7 de octubre de 1963.
2. La señora **CLEMENCIA MEJÍA GONZÁLEZ** se vinculó al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad con fecha de efectividad el 20 de septiembre de 2000.
3. La vinculación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad de la señora **CLEMENCIA MEJÍA GONZÁLEZ** fue a favor de **COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS**.
4. **COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS** para lograr la afiliación de la señora **CLEMENCIA MEJÍA GONZÁLEZ**, le manifestó que el Instituto de Seguros Sociales ISS (hoy COLPENSIONES) iba a desaparecer.
5. **COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS** para lograr la afiliación de régimen de la señora **CLEMENCIA MEJÍA GONZÁLEZ** le manifestó que su mesada pensional iba a ser mayor o igual en el Régimen de Ahorro Individual comparada con la resultante en el Régimen de Prima Media.
6. **COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS** omitió, al momento de la afiliación, brindar a la señora **CLEMENCIA MEJÍA GONZÁLEZ** la información relacionada con las ventajas y desventajas de dicho trámite.
7. **COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS** omitió, al momento de la afiliación, brindar a la señora **CLEMENCIA MEJÍA GONZÁLEZ** la información relacionada con la diferencia del monto de la pensión, que, una vez cumplidos los requisitos, percibiría en cada uno de los regímenes.
8. **COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS** omitió, al momento de la afiliación, brindar a la señora **CLEMENCIA MEJÍA GONZÁLEZ** la información relacionada con el cálculo de la mesada pensional, que este sería con base al saldo en su cuenta de ahorros, y que no sería tenido en cuenta

el promedio de cotización de los últimos 10 años o toda la vida.

9. **COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS** omitió, al momento de la afiliación, brindar a la señora **CLEMENCIA MEJÍA GONZÁLEZ** la información relacionada con que existen variables en el cálculo de la mesada pensional, como lo es la edad de la afiliada, la edad de su grupo familiar, semanas cotizadas, entre otros factores.
10. **COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS** omitió, al momento de la afiliación, brindar a la señora **CLEMENCIA MEJÍA GONZÁLEZ** la información relacionada con el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad R.A.I.S. contaba con tres modalidades de retiro, que son retiro programado, renta vitalicia y retiro programado con renta vitalicia.
11. La señora **CLEMENCIA MEJÍA GONZÁLEZ** tuvo el siguiente traslado horizontal:
 - El 10 de diciembre de 2001 a la **ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR**.
12. La señora **CLEMENCIA MEJÍA GONZÁLEZ**, sólo hasta ahora, se enteró de la proyección futura respecto de las condiciones pensionales, con el fin de obtener las diferencias entre un régimen y otro.
13. Dicha proyección de la mesada pensional en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad fue realizada por la **ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR**.
14. La proyección de la mesada pensional en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, realizada por **ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR**, fue proyectada por un valor de **UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL PESOS (\$1.300.000)**.
15. La proyección de la mesada pensional en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida fue solicitada a la **ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR**, pero omitieron hacerla.
16. A pesar de lo anterior, se efectuó una proyección de la mesada pensional de la **CLEMENCIA MEJÍA GONZÁLEZ** en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida, teniendo en cuenta sus cotizaciones en los últimos diez (10) años, la cual arrojó un valor de **DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS (\$ 2.664.571)**, para el año 2024.
17. El día 27 de junio de 2024, mi poderdante solicitó a la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES** traslado de régimen (radicado No. 2024_13039402).
18. La **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES** mediante Oficio 2024_13039402-40563990 del 27 de junio de 2024, rechazó la solicitud de traslado.
19. El día 8 de febrero de 2024, mi poderdante radicó derecho de petición ante **COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS**, solicitando, entre otras cosas, copia de la información que le fue brindada para la afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.
20. **COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS** a través de comunicación electrónica puesta en conocimiento el 6 de abril de 2024, allegó copia de la afiliación de mi poderdante.
21. **COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS** a través de comunicación electrónica puesta en conocimiento el 6 de abril de 2024, manifestó frente a la solicitud relacionada con la información brindada al momento de la afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad que dicha asesoría es suministrada por sus asesores comerciales quienes explican las diferencias existentes entre cada régimen, por lo que se entiende fue realizada de forma verbal.
22. El día 27 de junio de 2024, mi poderdante radicó derecho de petición ante **ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR**, solicitando, entre otras cosas, copia de la información que le fue brindada para la afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.

23. **ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR** a través de comunicación electrónica puesta en conocimiento el 12 de julio de 2024, allegó copia de la afiliación de mi poderdante.
24. **ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR** a través de comunicación electrónica puesta en conocimiento el 12 de julio de 2024, manifestó frente a la solicitud relacionada con la información brindada al momento de la afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, *se efectuó con la AFP COLFONDOS*.
25. La mesada pensional que la señora **CLEMENCIA MEJÍA GONZÁLEZ** percibiría en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES**, tiene un valor más representativo y consecuente con las cotizaciones que mi poderdante realizó durante toda su vida laboral.
26. Debido a que la señora **CLEMENCIA MEJÍA GONZÁLEZ** fue inducida a error por no haber recibido la información necesaria acerca de la afiliación por parte de **COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS**, su afiliación al Régimen Ahorro Individual Solidaridad debe predicarse ineficaz.
27. La señora **CLEMENCIA MEJÍA GONZÁLEZ** luego de evaluar las ventajas y desventajas de los regímenes pensionales, ha elegido afiliarse al Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por **COLPENSIONES**.

DECLARACIONES Y CONDENAS.

Con fundamento en los hechos anteriormente expuestos solicito al Señor(a) Juez, previo el reconocimiento de mi personería como apoderado judicial de la parte demandante y cumplidos los trámites de un proceso Ordinario Laboral de Primera Instancia, haga las siguientes o similares declaraciones y condenas:

1. Se DECLARE la ineficacia de la afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (**COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS**) efectuado por la señora **CLEMENCIA MEJÍA GONZÁLEZ**, el 20 de septiembre de 2000.
2. Se ORDENE a la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**, a afiliarse a mi poderdante sin dilación alguna, al Régimen de Prima Media con Prestación Definida.
3. Se ORDENE a la **ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR** (fondo en el que se encuentra afiliada actualmente la señora **CLEMENCIA MEJÍA GONZÁLEZ**) a girar el total del monto de la cuenta pensional de mi poderdante a la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**.
4. Se ORDENE a la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES** a recibir el total del monto de la cuenta pensional de mi poderdante proveniente de **ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR**.
5. Se CONDENE en costas y agencias en derecho a **COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS**, a la **ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR** y a la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**.

ARGUMENTACIÓN JURÍDICA.

El artículo 48 de la Constitución Política expone que la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación y control del Estado en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad en los términos de Ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable de la seguridad social.

Siendo la seguridad social un servicio público de estirpe constitucional, revestido de la condición de

irrenunciable, fundado en principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, se sujeta a la prevalencia de los derechos adquiridos y por esa razón le merece especial protección del Estado. De tal suerte que conforme a las voces del artículo 53 ibídem se le impone al legislador la obligación de expedir el estatuto de trabajo regido bajo los principios mínimos fundamentales como: remuneración vital móvil, proporcional a la cantidad de trabajo, irrenunciabilidad a los derechos mínimos establecidos en normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho, primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos en las relaciones laborales y garantía de la seguridad social.

El problema jurídico que se plantea en el presente caso, es determinar si la afiliación realizada por la señora **CLEMENCIA MEJÍA GONZÁLEZ** en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad R.A.I.S. **FUE INEFICAZ**, porque no existió soporte informativo por parte de **COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS** acerca de los riesgos de efectuar dicha afiliación.

Para resolver el problema jurídico planteado, debemos comenzar por indicar que antes de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 las personas que estuvieran vinculadas laboralmente, efectuaban cotizaciones para pensión en el Instituto de Seguros Sociales – ISS, hoy liquidado. Posteriormente, con el propósito de canalizar la multiplicidad de regímenes dispersos se crearon el Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por el ISS en ese entonces, y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, y quedó estipulado en el literal b del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 así:

“(…) b) La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o el traslado. El empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma, se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1o. del artículo 271 de la presente Ley; (…).”

Al respecto, la señora **CLEMENCIA MEJÍA GONZÁLEZ**, se vinculó el día el 20 de septiembre de 2000 sin consentimiento informado a **COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS**, es decir, no recibió asesoría brindada por dicha entidad, para conocer que sus intereses pensionales iban a ser más favorables, pero conforme al material probatorio allegado al plenario, se puede evidenciar que nunca se le hizo un análisis particular acerca de los alcances positivos y negativos que implicaba su aceptación; simplemente lo que se realizó fue una asesoría superficial y se requirió el diligenciamiento de un formulario corto en el que consagraba que de manera libre, espontánea y sin presiones, aceptaba dicha afiliación. Mi poderdante efectivamente desconocía las implicaciones a las que se estaba sometiendo al aceptar la afiliación en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad del que simplemente se le indicaron los beneficios y no las desventajas, situación que la llevó a aceptar la afiliación.

Conforme lo anterior, se puede apreciar que mi poderdante no recibió por parte de **COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS** ningún tipo de asesoría, en la que se llegara a visualizar una proyección futura con el fin de obtener las diferencias entre un régimen y otro; sencillamente, próxima a cumplir la edad para pensionarse, mi poderdante se enteró de tal imprecisión, de no haber sido así, se hubiese afiliado en el ISS, hoy **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**, donde tendría un mejor monto pensional.

Aunado a lo anterior y partiendo de que la norma es clara en consagrar que la selección del régimen pensional es libre y voluntaria, y que tal libertad parte de una información motivada que respalde la decisión so pena de que dicha afiliación quede sin efectos, tal como se estipuló el artículo 271 de la Ley 100 de 1993:

“El empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral, se hará acreedor en cada caso y por cada afiliado a una multa, impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o del Ministerio de Salud en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder 50 veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional o a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respectivamente. La afiliación respectiva quedará sin

efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador”.

Cabe indicar que dicha afiliación **FUE INEFICAZ**, ya que no se respetaron los principios consagrados de la seguridad social y tal situación afectó en gran medida la libertad, la dignidad humana y los derechos de trabajadora de mi poderdante, por la falta de transparencia en la asesoría brindada por **COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS**, la cual llevó a la señora **CLEMENCIA MEJÍA GONZÁLEZ** a tomar una decisión contraria para el derecho a su pensión, el cual está precedido de una protección especial del Estado. Así lo comenta la norma:

“ARTÍCULO 272. Aplicación Preferencial. El Sistema Integral de Seguridad Social establecido en la presente Ley, no tendrá, en ningún caso, aplicación cuando menoscabe la libertad, la dignidad humana o los derechos de los trabajadores.

En tal sentido, los principios mínimos fundamentales consagrados en el artículo 53 de la Constitución Política tendrán plena validez y eficacia”.¹

Para complementar lo argüido y hacer énfasis en la ineficacia de la afiliación que aquí se presenta, se trae a colación la sentencia de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral en Sentencia SL12136-2014 Radicación No. 46.292 Acta 31 Magistrada Ponente Dra. Elsy del Pilar Cuello Calderón en el que se dijo:

“(…) La importancia de lo aquí debatido permite que esta Sala recuerde que el sistema general de seguridad social se implantó con el objetivo de procurar una mayor cobertura respecto de las distintas contingencias y se edificó bajo los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación, todo ello en aras, además, de elevar la calidad de vida de los asociados y de materializar el postulado inserto en el artículo 48 de la Constitución Política.

En particular, en materia pensional, uno de los más vitales propósitos fue el de canalizar la multiplicidad de regímenes dispersos, y fue así que creó solo dos de carácter excluyente, el solidario de prima media con prestación definida y el de ahorro individual con solidaridad; mientras el primero se acoge el modelo en el cual se garantiza el pago de la pensión preestablecida siempre que se cumpla con la densidad de cotizaciones y la edad, constituyendo tales aportes un fondo común de naturaleza pública, en el de ahorro individual con solidaridad se privilegia el aporte de cada afiliado, y sus rendimientos financieros, los cuales se abonan a cuentas individuales, y la edad para hacerse acreedor de la pensión está sujeta a que exista un acumulado que permita obtener una mensual superior al 110% del salario mínimo legal mensual vigente.

*Para efectos de optar por alguno de ellos, el literal b) del artículo 13 de Ley 100 de 1993 dispuso la obligatoriedad de que tal manifestación fuera libre y voluntaria, y contempló como sanción, en caso de que ello no se concretara, una multa hasta de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, además de que **«la afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador»**; el literal e) ibidem estableció que «una vez efectuada la selección inicial ...*

Por demás el propio artículo 272 de dicho Estatuto de la Seguridad Social previó la inaplicación de disposiciones lesivas a los asociados cuando quiera que con ellas se menoscabara la libertad, la dignidad humana y los derechos de los trabajadores, y advirtió sobre la preponderancia de los principios mínimos contenidos en el precepto 53 constitucional.

En efecto, es el propio Estatuto de la Seguridad Social el que conceptúa que el régimen de ahorro individual con solidaridad, si bien propende por «la competencia entre las diferentes entidades administradoras del sector público y sector social solidario», se rige bajo el respeto del «que libremente escojan los afiliados», lo que exhibe que el legislador, si bien permitió que nuevos actores económicos incursionaran en la administración del Sistema Pensional, no descuidó que se honraran las prerrogativas de los afiliados, menos si se tiene en cuenta, se insiste, que regularía derechos constitucionalmente protegidos como la pensión.

¹ Ley 100 de 1993, artículo 272.

Bajo el entendido de que «el sistema **de seguridad social integral tiene por objeto garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afectan**» (artículo 1º, Ley 100 de 1993) y que la elección tanto del modelo de prima media con prestación definida, como el de ahorro individual con solidaridad, es determinante para predicar la aplicación o no del régimen de transición, es necesario entender, que las entidades encargadas de su dirección y funcionamiento, garanticen que existió una decisión informada, y que esta fue verdaderamente autónoma y consciente; ello es objetivamente verificable, en el entendido de que el afiliado debe conocer los riesgos de la afiliación, pero a su vez los beneficios que aquel le reportaría, de otro modo no puede explicarse el cambio de un régimen al otro.

A juicio de esta Sala no podría argüirse **que existe una manifestación libre y voluntaria cuando las personas desconocen sobre la incidencia que aquella pueda tener frente a sus derechos prestacionales, ni puede estimarse satisfecho tal requisito con una simple expresión genérica; de allí que desde el inicio haya correspondido a las Administradoras de Fondos de Pensiones dar cuenta de que documentaron clara y suficientemente los efectos que acarrea el cambio de régimen, so pena de declarar ineficaz ese tránsito.**

Solo a través de la demostración de la existencia de la libertad informada para el cambio de régimen, es que el juzgador podría avalar su transición; no se trata de demostrar razones para verificar sobre la anulación por distintas causas fácticas, **sino de determinar si hubo eficacia en la afiliación, lo que es relevante para entrar a fijar la pérdida o no de la transición normativa.** Al juzgador no le debe bastar con advertir que existió un traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad, sino que es menester, para la solución, advertir que la misma es válida, lo cual resulta un presupuesto obvio, máxime cuando esta Sala ha sostenido que el régimen de transición no es una mera expectativa. (...)

Realizar dicha tarea debe partir de **elementos objetivos, esto es que la libertad en la toma de una decisión de esa índole, solo puede justificarse cuando está acompañada de la información precisa, en la que se delimiten los alcances positivos y negativos en su adopción.** **Una inoportuna o insuficiente asesoría sobre los puntos del tránsito de régimen son indicativos de que la decisión no estuvo precedida de la comprensión suficiente, y menos del real consentimiento para adoptarla.**

Es evidente que cualquier determinación personal de la índole que aquí se discute, es eficaz, cuando existe un consentimiento informado; en materia de seguridad social, el juez no puede ignorar que, por la trascendencia de los derechos pensionales, la información, en este caso, de la afiliación de régimen, debe ser de transparencia máxima.

Para este tipo de asuntos, se repite, tales asertos no comprenden solo los beneficios que dispense el régimen al que pretende trasladarse, que puede ser cualquiera de los dos (prima media con prestación definida o ahorro individual con solidaridad), sino además el monto de la pensión que en cada uno de ellos se proyecte, la diferencia en el pago de los aportes que allí se realizarían, las implicaciones y la conveniencia o no de la eventual decisión y obviamente la declaración de aceptación de esa situación. Esas reglas básicas, permiten en caso de controversia estimar si la afiliación cumplió los mínimos de transparencia, y de contera, sirven de soporte para considerar si el régimen de transición le continuaba o no siendo aplicable.

El juez no puede pasar inadvertidas falencias informativas, menos considerar que ello no es de su resorte, pues es claro que cuando quien acude a la jurisdicción reclama que se le respete el régimen de transición, indiscutiblemente, como se anotó, surge la perentoriedad de estudiar los elementos estructurales para que el mismo opere, es decir, debe constatar que la afiliación se produjo en términos de eficacia, para luego, determinar las consecuencias propias. (...)

En tal sentido es evidente que el ad quem equivocó su decisión, al partir del hecho de que la afiliación fue libre y voluntario, sin soporte alguno, pese a que era necesario, dado que lo que se

estaba discutiendo era si se debía o no respetar el régimen de transición, determinar si aquel presupuesto normativo se presentaba, para, ahí sí, determinar si había o no perdido la referida transición; como así no se verificó en este caso, se casará la sentencia acusada”. (Resaltado y subrayado fuera de texto).

La Honorable Corte Suprema, Sala de Casación Laboral, en sentencia SL19447-2017, Magistrado Ponente el Dr. Gerardo Botero Zuluaga, expuso que:

“(…) queda claro que asistirá ineficacia de la afiliación cuando quiera que i) la insuficiencia de la información genere lesiones injustificadas en el derecho pensional del afiliado, impidiéndole su acceso al derecho; ii) no será suficiente la simple suscripción del formulario, sino el cotejo con la información brindada, la cual debe corresponder a la realidad: iii) en los términos del artículo 1604 del Código Civil corresponde a las Administradoras de Fondo de Pensiones allegar prueba sobre los datos proporcionados a los afiliados, los cuales, de no ser ciertos, tendrán además las sanciones pecuniarias del artículo 271 de Ley 100 de 1993 y en los que debe constatar los aspectos positivos y negativos de la vinculación y la incidencia en el derecho pensional.”

La Honorable Corte Suprema, Sala de Casación Laboral, en sentencia SL4964-2018, Magistrado Ponente Dr. Gerardo Botero Zuluaga estableció que:

“No es dable argumentar que existió una decisión informada y consciente, y por ende una manifestación libre y voluntaria por parte del afiliado para trasladarse de régimen, exigencia que no pueda considerarse satisfecha con el simple diligenciamiento del formato diseñado por la entidad para esos efectos y plasmarse en él la correspondiente firma del trabajador, puesto que es obligación del fondo de pensiones dar cuenta de que lo documentaron de manera clara y suficientemente y los efectos que puede ello acarrear, omisión que conduce inexorablemente a la declaratoria de ineficacia de la afiliación.

(…) El literal b) del artículo 13 de la ley en cita, la elección de cualquiera de los dos regímenes debe ser libre y voluntaria, lo que se exige no es cualquier tipo de asesoría, sino aquella que permita el ejercicio de la libertad informada (…)”
(…)

“(…) Asimismo, tal disposición prevé las consecuencias en la infracción de la información veraz cual es, que «La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador» (…)

Así, que es la propia ley la que sanciona, con severidad, el incumplimiento íntegro de los deberes de información que les atañe e incluso, para la controversia aquí suscitada ello era determinante, de un lado porque la simple manifestación genérica de aceptar las condiciones, no era suficiente, y de otro, correspondía dar cuenta de que se actuó diligentemente, no solo por la propia imposición que trae consigo la referida norma, sino porque en los términos del artículo 1604 del Código Civil, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo, y en este específico caso ellas no se agotan solo con traer a colación los documentos suscritos, sino la evidencia de que la asesoría brindada era suficiente para la persona, y esto no se satisfacía únicamente con llenar los espacios vacíos de un documento, sino con la evidencia real sobre que la información plasmada correspondiera a la realidad y atendiera las pautas para que se adoptara una decisión completamente libre, en las voces del referido artículo 13 de la Ley 100 de 1993”.

Aclara la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en la presente sentencia que la simple voluntad plasmada en la firma del formulario de afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad no significa que se haya brindado una debida información sobre las implicaciones de la afiliación de régimen y la condición futura de la pensión del afiliado, de la siguiente forma,

“(…) Para la Sala resulta claro que si bien la suscripción del formulario de traslado de régimen por parte del hoy demandante, se hizo de manera libre y voluntaria, ello no constituía una razón para que la administradora de pensiones BBVA Horizonte S.A., omitiera brindar la debida información de manera clara y precisa, sobre las incidencias o consecuencias del cambio al RAIS

(...).

Por otra parte, respecto de la carga de la prueba la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral, en la precitada sentencia es enfática en aclarar que corresponde a la AFP demostrar que brindó toda la información necesaria y oportuna al afiliado a fin de que tuviera la oportunidad de tomar una decisión libre y voluntaria que careciera de duda o afectación sobre el disfrute de la pensión del cliente:

“Para esta Sala de la Corte es claro, que es la AFP a quien incumbe acreditar que cumplió con el deber de asesoría e información a quienes tienen la intención de ser sus nuevos afiliados, la que debe comprender todas las etapas del proceso, desde la antesala de la afiliación hasta la determinación de las condiciones para el disfrute pensional, tal y como se sostuvo por esta Corporación en la sentencia CSJ SL, 9 sep. 2008, rad. 31989 «Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad».”

“De igual forma, ha puntualizado la Sala, que la información que se ha de proporcionar al afiliado, debe efectuarse bajo la óptica de que quien la brinda sabe de su importancia y valor, a fin de orientar a este, en aquellos aspectos que pueden acarrear consecuencias mayúsculas como es el caso del cambio de régimen, evento en el que la administradora tiene el deber del buen consejo, de ilustración suficiente dándole a conocer las diferentes alternativas, lo que en todo caso va más allá de una simple información o diligenciamiento de un formulario de vinculación o traslado”.

Una inoportuna o insuficiente asesoría sobre los puntos del tránsito de régimen son indicativos de que la decisión no estuvo precedida de la comprensión suficiente, y menos del real consentimiento para adoptarla.

Es evidente que cualquier determinación personal de la índole que aquí se discute, es eficaz, cuando existe un consentimiento informado; en materia de seguridad social, el juez no puede ignorar que por la trascendencia de los derechos pensionales, la información, en este caso, de la afiliación de régimen, debe ser de transparencia máxima.

Para este tipo de asuntos, se repite, tales asertos no comprenden solo los beneficios que dispense el régimen al que pretende trasladarse, que puede ser cualquiera de los dos (prima media con prestación definida o ahorro individual con solidaridad), sino además el monto de la pensión que en cada uno de ellos se proyecte, la diferencia en el pago de los aportes que allí se realizarían, las implicaciones y la conveniencia o no de la eventual decisión y obviamente la declaración de aceptación de esa situación. Esas reglas básicas, permiten en caso de controversia estimar si la afiliación cumplió los mínimos de transparencia, y de contera, sirven de soporte para considerar si el régimen de transición le continuaba o no siendo aplicable.

El juez no puede pasar inadvertidas falencias informativas, menos considerar que ello no es de su resorte, pues es claro que cuando quien acude a la jurisdicción reclama que se le respete el régimen de transición, indiscutiblemente, como se anotó, surge la perentoriedad de estudiar los elementos estructurales para que el mismo opere, es decir, debe constatar que la afiliación se produjo en términos de eficacia, para luego, determinar las consecuencias propias”.

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral en sentencia SL1452-2019 afirmó que la incursión de nuevos actores al sistema de seguridad social de carácter privado, encargados de la gestión fiduciaria de los ahorros de los afiliados en el RAIS y, por tanto, de la prestación de un servicio público esencial, estuvo, desde un principio, sujeto a las restricciones y deberes que la naturaleza de sus actividades implica. Las Administradas de Fondos de Pensiones tienen la obligación de suministrar información verídica y clara al momento del cambio de régimen a fin de que los afiliados tengan la oportunidad de decidir con claridad si desean realizar la afiliación de régimen.

“De esta manera, como puede verse, desde su fundación, las sociedades administradoras de fondos de pensiones tenían la obligación de garantizar una afiliación libre y voluntaria, mediante la entrega de información suficiente y transparente que permita al afiliado elegir entre las distintas

opciones posibles en el mercado, aquella que mejor se ajustara a sus intereses. No se trataba por tanto de una carrera de los promotores de las AFP por capturar a los ciudadanos incautos mediante habilidades y destrezas en el ofrecimiento de los servicios, sin importar las repercusiones colectivas que ello pudiese traer en el futuro. La actividad de explotación económica del servicio de la seguridad social debía estar precedida del respeto debido a las personas e inspirado en los principios de prevalencia del interés general, transparencia y buena fe de quien presta un servicio público”.

Por lo tanto, resulta pertinente recordar:

“(…) la Corte ha dicho que no puede alegarse “que existe una manifestación libre y voluntaria cuando las personas desconocen sobre la incidencia que aquella pueda tener frente a sus derechos prestacionales, ni puede estimarse satisfecho tal requisito con una simple expresión genérica; de allí que desde el inicio haya correspondido a las Administradoras de Fondos de Pensiones dar cuenta de que documentaron clara y suficientemente los efectos que acarrea el cambio de régimen, so pena de declarar ineficaz ese tránsito” (CSJ SL12136-2014) (…)

De esta manera, como puede verse, desde su fundación, las sociedades administradoras de fondos de pensiones tenían la obligación de garantizar una afiliación libre y voluntaria, mediante la entrega de la información suficiente y transparente que permitiera al afiliado elegir entre las distintas opciones posibles en el mercado, aquella que mejor se ajustara a sus intereses. No se trataba por tanto de una carrera de los promotores de las AFP por capturar a los ciudadanos incautos mediante habilidades y destrezas en el ofrecimiento de los servicios, sin importar las repercusiones colectivas que ello pudiese traer en el futuro. La actividad de explotación económica del servicio de la seguridad social debía estar precedida del respeto debido a las personas e inspirado en los principios de prevalencia del interés general, transparencia y buena fe de quien presta un servicio público.”

Si bien es cierto las AFP son entidades de carácter privado, las cuales pueden lucrarse de su actividad económica, se les impone el deber de actuar como prestadores de servicios públicos, respondiendo a la inmensa responsabilidad social y empresarial que esto atañe, razón por la cual tiene el deber de brindar a sus usuarios *“la mayor información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado”.*

*“La transparencia es una norma de diálogo que le impone a las administradoras, a través del promotor de servicios o asesor comercial, dar a conocer al usuario en un lenguaje claro, simple y comprensible, los elementos definitorios y condiciones del régimen de ahorro individual de manera que la elección pueda realizarse por el afiliado después de comprender a plenitud las reglas, consecuencias y riesgos de cada uno de los oferentes de servicios. **La transparencia impone la obligación de dar a conocer toda la verdad objetiva de los regímenes, evitando sobredimensionar lo bueno, callar sobre lo malo y parcializar lo neutro**”.*

En el mismo pronunciamiento la Honorable Corte Suprema de Justicia hace énfasis en el deber de asesoría y buen consejo a cargo de las administradoras de pensiones, si bien este es un deber que las administradoras tiene a su cargo desde la creación de las mismas fue la Ley 1328 de 2009 y el Decreto 2241 representantes de un avance significativo en la protección de los derechos financieros del sistema de seguridad social en pensiones.

“(…) el literal c) del artículo 3° de la Ley 1328 de 2009 puntualizó que en las relaciones entre los consumidores y las entidades financieras debía observarse con celo el principio de “transparencia e información cierta, suficiente y oportuna”, conforme al cual “Las entidades vigiladas deberán suministrar los consumidores financieros información cierta, suficiente, claro y oportuna que permita, especialmente que los consumidores financieros conozca adecuadamente sus derechos, obligaciones y los costos en las relaciones que establecen con las entidades vigiladas.

(…)

(...)” El deber de asesoría y buen consejo comporta el análisis previo, calificado y holístico de los antecedentes del afiliado y los pormenores de los regímenes pensionales, a fin de que el asesor o promotor le informe lo pertinente. Esta fase supone el acompañamiento e interacción con personas expertas en la materia que le permitan al trabajador, con respaldo en la opinión, sugerencia o ilustración de su asesor, tomar decisiones responsables en torno a la inversión más apropiada de sus ahorros pensionales”.

De igual forma la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, dando continuidad a los deberes de las AFP establece que el simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación es insuficiente, si bien es cierto, las administradora de fondos de pensiones consignan en sus formularios de afiliación que estos se suscriben de forma libre y voluntaria, dichas afirmaciones no prueban el consentimiento informado del cliente, no obstante si demuestran que estos se suscriben sin ningún tipo de constreñimiento o fuerza.

“(...) no se trata únicamente de completar un formato, ni adherirse a una cláusula genérica, sino de haber tenido los elementos de juicio suficientes para advertir la trascendencia de la decisión adoptada, tanto en el cambio de prima media al de ahorro individual con solidaridad, encontrándose o no la persona en transición, aspecto que soslayó el juzgado al definir la controversia, pues halló suficiente una firma en un formulario²(...)”

“(...) El acto jurídico de cambio de régimen debe estar precedido de una ilustración al trabajador o usuario, como mínimo, acerca de las características, condiciones, acceso, ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes pensionales, así como de los riegos y consecuencias del traslado”.

“Por tanto, hoy en el campo de la seguridad social, existe un verdadero e insoslayable deber se obtener un consentimiento informado, entendido como un procedimiento que garantiza, antes de aceptar un ofrecimiento o un servicio, la comprensión por el usuario de las condiciones, riesgos y consecuencias de su afiliación al régimen. Vale decir, que el afiliado antes de dar su consentimiento, ha recibido información clara, cierta, comprensible y oportuna”.

Finalmente, respecto a la carga de la prueba, esta debe invertirse en favor del afiliado, puesto que es el afiliado quien advierte la negativa del fondo de pensiones en brindar la información clara y precisa que permita al trabajador realizar el cambio de régimen de forma consciente. Es así que le compete a la AFP comprobar el cumplimiento del deber de información y consejo.

“Frente al tema puntual de a quien le corresponde demostrarla, debe precisarse que si el afiliado alega que no recibió la información debida cuando se afilió, ello corresponde a un supuesto que no puede demostrarse materialmente por quien lo invoca.

En consecuencia, si se arguye que a la afiliación, la AFP no suministró información veraz y suficiente, pese a que debía hacerlo, se dice con ello, que la entidad incumplió voluntariamente una gama de obligaciones de las que depende la validez del contrato de aseguramiento. En ese sentido, tal afirmación se acredita con el hecho positivo contrario, esto es, que se suministró la asesoría en forma correcta. Entonces, como el trabajador no puede acreditar que no recibió información, corresponde a su contraparte demostrar que si la brindó, dado que es quien está en posición de hacerlo”.

En el mismo sentido, se trae a colación la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali – Sala Laboral, la cual concluye que, la información para la selección del régimen pensional es una obligación intrínseca desde el inicio del proceso del traslado, por su naturaleza y su condición aun cuando la primera y única vinculación ha sido en el RAIS:

“En cuanto a la información al momento del traslado o afiliación, se ha indicado que esta corresponde a la descripción de las características, condiciones, acceso y servicios de cada uno de los regímenes pensionales, de modo que la afiliada pueda conocer con exactitud la lógica de los sistemas públicos y privados de pensiones. Por lo tanto, implica un parangón entre las

² Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Sentencia SL19447-2017

características, ventajas y desventajas objetivas de cada uno de los regímenes vigentes, así como de las consecuencias jurídicas del traslado, llegando si ese fuere el caso, a desanimar a la interesada de tomar una opción que claramente le perjudica (CSJ SL 31989 de 2008, CSJ SL4989-2018 y SL1452-2019).

Así las cosas, para que la decisión sea autónoma y consciente, es necesario que la afiliada entienda a cabalidad tanto los beneficios como los perjuicios que conllevarían su determinación de transferir sus aportes de un régimen a otro. (Ver CSJ SL 31989 y 31314, del 9 de septiembre de 2008, reiteradas en la del 22 de noviembre de 2011 radicado 33083, SL12136)

Por consiguiente, las sociedades administradoras de fondos de pensiones desde su fundación han tenido la obligación de garantizar una afiliación libre y voluntaria, mediante la entrega de la información suficiente y transparente que permitiera a la afiliada elegir entre las distintas opciones posibles en el mercado, aquella que mejor se ajustara a sus intereses y, sobre este punto, jurisprudencialmente se ha definido que es la AFP a la cual se efectuó la afiliación a quien le corresponde la carga de la prueba.)”³.

Es así, que no brindar la información requerida y necesaria para que el trabajador pudiese tomar una decisión consciente, invalida la afiliación realizada por el incumplimiento de los deberes que recaen en la AFP como prestadora de servicios públicos.

Para el caso concreto, se tiene que la señora **CLEMENCIA MEJÍA GONZÁLEZ**, no recibió por parte de **COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS**, el soporte informativo necesario para conocer los riesgos a los que se sometía por afiliarse al R.A.I.S y, en este mismo sentido, la **AFP omitió** al momento de la afiliación, brindar a mi poderdante la información relacionada con las consecuencias de la vinculación, las ventajas y desventajas de dicho trámite, y la diferencia del monto de la pensión del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, que una vez cumplidos los requisitos, percibiría en cada uno de los regímenes, aseveraciones que constituyen evidentemente una negación indefinida, lo cual releva a mi poderdante la carga de probar ese supuesto de hecho, y además se torna innecesario determinar, si la señora **CLEMENCIA MEJÍA GONZÁLEZ** es beneficiaria del régimen de transición, toda vez que ese hallazgo, sólo tendría efectos para determinar la carga probatoria y ésta ya lo está, en el sentido que le corresponde a **COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS** acreditar que suministró a la actora la debida información con respecto de la totalidad de las consecuencias negativas y positivas que le generaba la afiliación de régimen.

Así las cosas, en el presente caso es indiscutible que mi poderdante fue inducida a un error al no haber recibido la información necesaria acerca de la afiliación de régimen efectuado por parte de **CLEMENCIA MEJÍA GONZÁLEZ**, lo que generó ineficacia en el mismo y más aún cuando este suceso la llevó a no elegir de manera transparente sus beneficios mínimos como trabajadora, que no son otros que la obtención de la pensión de vejez, afectando entre otros derechos fundamentales, el de dignidad humana.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Se tendrán como fundamentos de derecho lo dispuesto en los artículos 48 y 53 de la Constitución Nacional; artículos 13, 36, 271 y 272 de la Ley 100 de 1993.

CUANTÍA.

En consideración a lo señalado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia mediante Auto del 21 de marzo de 2018, en el proceso con radicado No. 78353, AL1237-2018, Magistrado Ponente: Gerardo Botero Zuluaga, la cuantía de este proceso se estima de la siguiente forma:

- **PROYECCIÓN DE MESADA PENSIONAL EN COLPENSIONES:** \$ 2.664.571 pesos
(Dos millones setecientos sesenta y cuatro mil quinientos setenta y un pesos).

³ Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Laboral, MP. Antonio José Valencia Manzano, Sentencia del 28 de febrero de 2023, Rad.76001310500520170025001.

- **PROYECCIÓN DE MESADA PENSIONAL EN PROTECCIÓN:** \$1.300.000 pesos
(Un millón trescientos mil pesos)
- **DIFERENCIA ENTRE MESADAS PENSIONALES:** \$1.364.571 pesos
(Seis millones ciento sesenta y siete mil ciento seis pesos).

Teniendo en cuenta que la probabilidad de vida de mi poderdante, la señora **CLEMENCIA MEJÍA GONZÁLEZ**, a partir de sus 57 años de edad es de 29.7 de acuerdo con la Resolución No. 1555 de 2010 proferida por la Superintendencia Financiera de Colombia, el cálculo se establece, multiplicando la diferencia entre las mesadas pensionales, por el número de mesadas a recibir por año, por el número de años de probabilidad de vida, así:

$$\underline{\$1.364.571 \times 13 \text{ mesadas} \times 29.7 \text{ años} = \$526.860.863}$$

Dadas las explicaciones y cálculos anteriores, se estima que la cuantía de la presente Demanda Ordinaria Laboral asciende a la suma de **QUINIENTOS VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS (\$526.860.863)**

PROCEDIMIENTO.

En cuanto al procedimiento, debe dársele a este proceso el de un **ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA**, por tratarse de una pensión.

COMPETENCIA.

De acuerdo al artículo 11 del Código de Procedimiento del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 8º de la Ley 712 de 2001; en cuanto el lugar donde se haya surtido la reclamación del respectivo derecho, es Usted competente señor(a) Juez en Primera Instancia.

PRUEBAS.

Documentales:

1. Recibido de la solicitud de traslado de régimen presentada ante la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES** el 27 de junio de 2024 (radicado No. 2024_13039402), consta de un (1) folio.
2. Oficio 2024_13039402-40563990 del 27 de junio de 2024, por medio del cual la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**, rechaza la solicitud de traslado de régimen, consta de un (1) folio.
3. Recibido del derecho de petición presentado a la **COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS**, el 8 de febrero de 2024, consta de un (1) folio.
4. Comunicación electrónica puesta en conocimiento el 6 de abril de 2024 por medio de la cual la **COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS**. da respuesta a la petición del 8 de febrero de 2024, consta de doce (12) folios.
5. Recibido del derecho de petición presentado a la **ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR**, el 27 de junio de 2024, consta de un (1) folio.
6. Comunicación electrónica puesta en conocimiento el 12 de julio de 2024 por medio de la cual la **ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR** da respuesta a la petición del 27 de junio de 2024, consta de cincuenta y dos (52) folios.
7. Cuadro liquidación de pensión de la señora **CLEMENCIA MEJÍA GONZÁLEZ**, consta de un (1) folio.

De oficio:

1. Sírvasse Señor(a) Juez oficiar a la **ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR** para que allegue copia del expediente administrativo de mi poderdante.

2. Sírvase Señor(a) Juez oficiar a la **COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS** para que allegue copia del expediente administrativo de mi poderdante.
3. Sírvase Señor(a) Juez oficiar a la **ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR** para que allegue copia de la proyección de la mesada pensional de la señora **CLEMENCIA MEJÍA GONZÁLEZ** en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida, ello teniendo en cuenta que con anterioridad fue solicitada ante dicha entidad, pero la misma ha omitido dar contestación a la mencionada petición.

ANEXOS.

1. Copia de la cédula de la señora **CLEMENCIA MEJÍA GONZÁLEZ**, consta de un (1) folio.
2. Poder otorgado a favor de la sociedad **ACCIÓN LEGAL SERVICIOS JURÍDICOS INTEGRALES S.A.S.**, consta de tres (3) folios.
3. Fotocopia de mi cédula de ciudadanía y mi Tarjeta Profesional de abogado, consta de dos (2) folios.
4. Certificado de existencia y representación legal de la sociedad **ACCIÓN LEGAL SERVICIOS JURÍDICOS INTEGRALES S.A.S.**, consta de seis (6) folios.
5. Copia Certificado de existencia y representación legal de **COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS**, consta de treinta y un (31) folios.
6. Copia Certificado de existencia y representación legal de **ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR**, consta de veinticuatro (24) folios.
7. Documentos relacionados en el acápite de pruebas.

NOTIFICACIONES.

LA DEMANDANTE: las recibirá en la Carrera 18 No. 10-83, Apartamento 502, Balcón de Pinares, Pereira, Risaralda. Celular: 3148353021. Email: cmejia2@areandina.edu.co

LAS DEMANDADAS:

COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS recibirá notificaciones por intermedio de su presidente doctora **MARCELA GIRALDO GARCÍA**, o por quien como tal haga sus veces, en la calle 11 No. 6-49, Cali. Dirección electrónica para notificaciones judiciales: procesosjudiciales@colfondos.com.co, el cual se extrae del certificado de existencia y representación legal respectivo.

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S. A., recibirá notificaciones por intermedio de su presidente doctor **MIGUEL LARGACHA MARTÍNEZ**, o por quien como tal haga sus veces, en la Calle 21 norte N° 6N-04, Cali. Dirección electrónica para notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@porvenir.com.co, el cual se extrae del certificado de existencia y representación legal respectivo.

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, recibirá notificaciones por intermedio de su Gerente Regional doctora **PIEDAD CECILIA CARDONA PÉREZ**, o por quien como tal haga sus veces, en la en la Avenida 2 Norte No. 7 N – 45, Barrio Centenario, Cali. Dirección electrónica para notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co el cual se encuentra en la página principal de internet de la entidad: <https://www.colpensiones.gov.co/>, en su parte inferior de la siguiente manera:

Colpensiones



Sede Administrativa: Carrera 7 No. 74 -21 Edificio Aurora Bogotá D.C., - Cundinamarca (No hay atención a ciudadanos)

Código Postal: 110231

Teléfono Conmutador Bogotá: (57+601) 489 09 09

Teléfono Conmutador Medellín: (57+604) 283 60 90

Teléfono Conmutador BEPS Bogotá: (57+601) 487 03 00

Línea Gratuita: 018000 41 09 09

Línea Gratuita BEPS: 018000 41 0777

Línea de Bienestar: 018000 42 5555

Línea Anticorrupción: 01 8000 518500

Correo para recibir exclusivamente notificaciones de la Rama Judicial:

notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co (Ley 1437 de 2011, art.197 CPACA).

Correo exclusivo radicación facturas/comunicaciones oficiales externas:

contacto@colpensiones.gov.co

LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO recibirá notificaciones en la Carrera 7ª No. 75 – 66 piso 2 y 3 Bogotá D.C., Dirección electrónica para notificaciones judiciales: procesosnacionales@defensajuridica.gov.co

EL MINISTERIO PÚBLICO recibirá notificaciones en la Calle 11 # 5 - 54, Oficina 711, Edificio Bancolombia, Cali, Dirección electrónica para notificaciones judiciales: procesosjudiciales@procuraduria.gov.co

LA SOCIEDAD APODERADA recibe notificaciones personales en la Calle 19 No. 8 – 34, oficina 1206 del Edificio Corporación Financiera de Occidente en la ciudad de Pereira. Teléfonos: (606) 3352222 – 3135517009. Dirección electrónica para notificaciones judiciales: notificaciones@accionlegal.co

Con el acostumbrado respeto,

JAVIER CASTAÑEDA TABORDA

Abogado inscrito **ACCIÓN LEGAL SERVICIOS JURÍDICOS INTEGRALES S.A.S.**

C.C. No. 10.135.708 de Pereira

T.P. No. 197.733 del C.S.J.

PODER CLEMENCIA MEJÍA GONZÁLEZ

De ACCIÓN LEGAL SERVICIOS JURÍDICOS INTEGRALES S.A.S. <notificaciones@accionlegal.co>
Destinatario <cmejia2@areandina.edu.co>
Fecha 2024-08-14 17:30

Doctor (a)

JUEZ LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI – REPARTO

Cali

ASUNTO: PODER ESPECIAL

CLEMENCIA MEJÍA GONZALEZ, mayor de edad, identificada como aparezco al pie de mi correspondiente firma, obrando en mi propio nombre, por medio del presente escrito me dirijo a Usted con todo respeto, para manifestarle que confiero poder especial amplio y suficiente a la sociedad **ACCIÓN LEGAL SERVICIOS JURÍDICOS INTEGRALES S.A.S. identificada con NIT. 900.902.274 – 7** y cuyo representante legal es **JULIANA MARÍA VINASCO GRAJALES**, para que en mi nombre y representación instaure Proceso Ordinario Laboral de Primera Instancia, en contra de la **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**, la cual está legalmente representada por su presidente **MIGUEL LARGACHA MARTÍNEZ** o por quien como tal haga sus veces, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá; en contra de **COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS**, la cual está legalmente representada por su presidente **MARCELA GIRALDO GARCÍA**, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá; y en contra de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**, Empresa Industrial y Comercial del Estado, organizada como entidad financiera de carácter especial, vinculada al Ministerio de Trabajo, con domicilio principal en Bogotá D.C., y regional en esta ciudad, la cual está legalmente representada por su gerente regional doctora **PIEDAD CECILIA CARDONA PÉREZ** o por quien haga sus veces; con el fin de obtener la ineficacia de mi afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y, cómo consecuencia de ello, se ordene girar el total del monto de mi cuenta pensional a **la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**.

La sociedad apoderada tiene las facultades generales previstas en el Art. 77 del Código General del Proceso y las especiales de recibir, conciliar, desistir, transigir, solicitar y tachar documentos, renunciar, sustituir y reasumir este mandato, y en general para realizar todos los trámites inherentes al mismo.

Por último, se indica que la sociedad **ACCIÓN LEGAL SERVICIOS JURÍDICOS INTEGRALES S.A.S.**, recibe notificaciones judiciales en el correo: notificaciones@accionlegal.co

Atentamente,

CLEMENCIA MEJÍA GONZALEZ

C.C. No. 42.069.180 de Pereira

Acepto,

ACCIÓN LEGAL SERVICIOS JURÍDICOS INTEGRALES S.A.S.

NIT. 900.902.274 – 7

Representante legal **JULIANA MARÍA VINASCO GRAJALES.**

C.C. No. 42.154.917 de Pereira

T.P. No. 212.872 del C.S.J.

--

Atentamente,

Acción Legal Servicios Jurídicos Integrales S.A.S.

Calle 19 No. 8-34 Oficina 1206 Pereira.

P.B.X: (6) 3352222 Celular: 3135517009

Previsualizar mensaje

 Responder  Responder ...  Reenviar  Eliminar  Imprimir  Archivo  SPAM  Marcar  Más  Anterior  Siguiente 

Poder Especial

**De** [Clemencia Mejía Gonzalez <cmejia2@areandina.edu.co>](mailto:cmejia2@areandina.edu.co)**Destinatario** notificaciones@accionlegal.co**Fecha** Hoy 12:11 Resumen  Cabeceras  Sólo texto

Doctor (a)

JUEZ LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI – REPARTO

Cali

ASUNTO: PODER ESPECIAL

CLEMENCIA MEJÍA GONZALEZ, mayor de edad, identificada como aparezco al pie de mi correspondiente firma, obrando en mi propio nombre, por medio del presente escrito me dirijo a Usted con todo respeto, para manifestarle que confiero poder especial amplio y suficiente a la sociedad **ACCIÓN LEGAL SERVICIOS JURÍDICOS INTEGRALES S.A.S. identificada con NIT. 900.902.274 – 7** y cuyo representante legal es **JULIANA MARÍA VINASCO GRAJALES**, para que en mi nombre y representación instaure Proceso Ordinario Laboral de Primera Instancia, en contra de la **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**, la cual está legalmente representada por su presidente **MIGUEL LARGACHA MARTÍNEZ** o por quien como tal haga sus veces, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá; en contra de **COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS**, la cual está legalmente representada por su presidente **MARCELA GIRALDO GARCÍA**, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá; y en contra de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**, Empresa Industrial y Comercial del Estado, organizada como entidad financiera de carácter especial, vinculada al Ministerio de Trabajo, con domicilio principal en Bogotá D.C., y regional en esta ciudad, la cual está legalmente representada por su gerente regional doctora **PIEDAD CECILIA CARDONA PÉREZ** o por quien haga sus veces; con el fin de obtener la ineficacia de mi afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y, como consecuencia de ello, se ordene girar el total del monto de mi cuenta pensional a la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**.

La sociedad apoderada tiene las facultades generales previstas en el Art. 77 del Código General del Proceso y las especiales de recibir, conciliar, desistir, transigir, solicitar y tachar documentos, renunciar, sustituir y reasumir este mandato, y en general para realizar todos los trámites inherentes al mismo.

Por último, se indica que la sociedad **ACCIÓN LEGAL SERVICIOS JURÍDICOS INTEGRALES S.A.S.**, recibe notificaciones judiciales en el correo: notificaciones@accionlegal.co

Atentamente,

CLEMENCIA MEJÍA GONZÁLEZ

C.C. No. 42.069.180 de Pereira

F.T. Clemencia Mejía González

Correo: cmejia2@areandina.edu.co - clemejia7@gmail.com

Tel: 3108353021

Pereira.

Resultado de imagen para logo areandina 2017